



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, marzo 9 de 2023

Radicado: 05001 31 05-**017-2020-00047-01**
Accionante: CARLOS MARIO RESTREPO PATIÑO Y GLORIA AUXILIO MEJÍA BETANCUR
Demandados: PAULA ANDREA MONTOYA ZULUAGA
Asunto: APELACIÓN DECISIÓN EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN
Tema: HONORARIOS PROFESIONALES

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Pretenden los accionantes el reconocimiento de honorarios profesionales en razón a la gestión de defensa judicial en un proceso ordinario de simulación absoluta de mayor cuantía, los que tasan en la suma de \$67'800.000, con sus intereses o en subsidio indexación.

Para sustentar y contextualizar sus pretensiones expuso que fue contratado por Hernando de Jesús Montoya Sepúlveda para efectos de adelantar un trámite de liquidación conyugal por muerte de su esposa María Estella Tobón Echeverri, empero se verificó que ésta había vendido a su hermana Luz Inés Tobón Echeverri

la nuda propiedad de unos inmuebles, dando inicio a algunas gestiones de conciliación.

Que en razón al fallecimiento de Hernando de Jesús Montoya ocurrido el 31 de octubre de 2014, se realizó una nueva contratación con la hija del causante y ahora demandada Paula Andrea Montoya Sepúlveda suscribiendo varios contratos de prestación de servicios, entre ellos para la declaratoria de una simulación y la sucesión de los cónyuges, para el ejercicio de una acción penal y querrela de policía por ocupación de hecho.

Que se presentó una acción de lanzamiento por ocupación de hecho, trámite ante la Inspección Municipal de Urrao – Antioquia, fijando audiencia de conciliación para el 24/07/2015 a las 12:00 m, empero previo a tal data las partes llegaron a un acuerdo, el que fue presentado ante la Inspección Municipal, suscribiendo un contrato de transacción el 25/07/2015. En cuanto a los honorarios refiere que corresponden a 67'800.000, siendo este el 30% del valor de los inmuebles recuperados que lo fue de \$226'000.000 según avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín .

Indicó que la sucesión de María Estella Tobón Echeverri se inició por petición de los hermanos de esta, donde se hizo parte el abogado Restrepo Patiño en representación de Paula Andrea Montoya, proceso que terminó en octubre de 2018 con sentencia que aprobó el trabajo de partición y adjudicación y sin que la señora Paula Andrea Montoya cancelara los honorarios, remitió reclamación el 10 de diciembre de 2018 que denominó “requerimiento de pago de honorarios totales”.

Que el 19 de enero de 2019 sostuvo una conversación con la demandante donde se le cancelaron los honorarios por la sucesión, empero se le indicó que no le sería reconocido valor alguno por concepto del trámite de simulación ya que este no se realizó.

En respuesta a la demanda la accionada indicó que los honorarios fueron reconocidos conforme a la gestión realizada, sin que haya lugar al pago en razón al contrato de prestación de servicios por el proceso de simulación en tanto este no se adelantó. Como medios de defensa propuso la excepción de prescripción entre otras tendientes a derruir las peticiones de la activa.

En diligencia convocada para atender las etapas de que tratan los artículos 77 y 80 del CPTS la falladora de instancia indicó que, pese a que la pasiva no propuso de forma expresa excepciones previas, si aludió a la ocurrencia de la prescripción extintiva, la que conforme al artículo 32 del CPTSS puede decirse como previa cuando no existe discusión sobre los elementos fácticos.

En este sentido, refiriéndose a los diferentes contratos de prestación de servicio, en particular el que se reclama su satisfacción en este trámite y que tenía como propósito el ejercicio de una acción judicial por simulación, declaró probada esta excepción especificando que el término de prescripción aplicable a este tipo de discusión es de 3 años consagrado en la legislación laboral, artículos 488 CST, 151 del CPTSS e incluso el artículo 2542 del Código Civil (referente al reconocimiento de honorarios para profesiones liberales)

Explicó que no existe discusión respecto a la inexistencia del ejercicio de la acción de simulación como tampoco que el objeto de esta gestión se cumplió con la suscripción del acuerdo de transacción que data del 25 de julio de 2015 (fl. 242/246) sin que se demuestre que los acá accionantes participaron en el proceso de escrituración de los inmuebles que serían reclamados en el proceso de simulación, empero si tal acompañamiento se hubiere realizado, se denota que la escrituras se autorizaron el 31 de octubre de 2015.

Así las cosas, estableció que la reclamación elevada el 10 de diciembre de 2018 no tuvo la capacidad de interrumpir el término de prescripción, el que ya se había consolidado desde el 25 de julio de 2018 (fecha de la suscripción de la

transacción) o incluso desde el 31 de octubre de 2015 (fecha de suscripción de las escrituras de venta de los inmuebles), declarando la ocurrencia de tal medio exceptivo que da lugar a la terminación del trámite.

Inconforme con la decisión se presentó recurso de apelación indicando que en favor de la señora Montoya Zuluaga se adelantaban varias gestiones, sin que fuera costumbre de esta oficina de abogados demandar a sus representados ni hacerles cobros antes de terminar las gestiones, resaltando que como estrategia de demanda se pretendía demostrar a través de interrogatorio de parte y prueba testimonial que hubo una novación del contrato de prestación de servicios.

ALEGATOS

Otorgada la oportunidad que señala el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 las partes presentaron sendos escritos, donde la activa alude a argumentos no expuestos en la sustentación del recurso de apelación, conceptuando sobre el término de exigibilidad del contrato de prestación de servicios para la declaratoria de simulación, en esta ocasión aludiendo a la necesidad de registro por parte de la oficina de instrumentos públicos, además de la elaboración de un avalúo de un inmueble realizado en septiembre 17 de 2017.

A la par, la pasiva insistió en la improcedencia de las pretensiones, no solo en razón a la satisfacción de los pagos acordados conforme a las gestiones realizadas, pero además por la ocurrencia de la prescripción extintiva.

CONSIDERACIONES

Previo a resolver los aspectos objeto de apelación encuentra la Sala pertinente expresar que conforme a las pruebas aportadas al proceso y restringido el análisis a los aspectos objeto de impugnación por la pasiva, en el presente evento se encuentra por fuera de discusión: **1)** Que Paula Andrea Montoya Zuluaga como contratante y Carlos Mario Restrepo Patiño y Gloria Auxilio Mejía como

contratados suscribieron múltiples contratos de prestación de servicios profesionales jurídicos (Pág 43/64 expediente escaneado), entre ellos se destaca aquel que tiene como propósito “*prestará asesoría jurídica e iniciara (sic) y llevará hasta su terminación DEMANDA ORDINARIA DE SIMULACIÓN ABSOLUTA DE MAYOR CUANTÍA contra la señora LUZ INÉS TOBÓN ECHEVERRI...*” (PÁG 62/64); **2)** Que como contraprestación del servicio se pactó \$1'500.000 como anticipo y el saldo, con el 30% del valor comercial de los inmuebles recuperados; **3)** que el 25 de julio de 2018 entre Luz Inés Tobón Echeverri y Paula Andrea Montoya Zuluaga se suscribió un contrato de transacción civil a efectos conciliar, transar e impedir un litigio futuro, documento suscrito por el abogado Carlos Mario Restrepo Patiño como testigo (pág 72/75 archivo N° 1)

Así las cosas, en virtud del principio de consonancia con la decisión de la falladora de instancia y los argumentos de disenso de la activa le corresponde a esta corporación determinar si los honorarios profesionales reclamados en la presente acción se encuentran afectados por la prescripción extintiva.

Pues bien, frente a la fijación de honorarios de los abogados, ha de remitirse a los artículos 2142, 2149 y 2159 del Código Civil, que definen el contrato de mandato como aquel en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, quien se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Contrato que por regla general se rige por el principio de libertad contractual. Por tanto, el pacto puede realizarse a través de cualquier medio ya sea escrito, verbal. Sin embargo, cuando sus términos se vierten expresamente por escrito, las partes quedan obligadas en los precisos términos acordados. (al respecto la sentencia SL 1813 de 2018)

Ahora bien, se trata de contrato que puede ser gratuito u oneroso; con una remuneración que puede pactarse como una suma cierta, ora como una suma determinable, en esta última categoría se halla el pacto de cuota litis, donde el

derecho a percibir una remuneración por el mandato se ata al resultado favorable del litigio (al respecto la sentencia CSJ SL 2803 de 2020).

En cuanto al término de prescripción para el ejercicio de esta acción debe tenerse presente el momento de exigibilidad de la obligación lo que marca el hito de inicio del tiempo para el ejercicio de su reclamación, destacando que para efectos de establecer el cómputo del término se acude a las reglas procesales laborales, teniendo entonces la activa un tiempo de 3 años para interrumpir tal término extintivo ora a través del simple reclamo al deudor, otra adelantando la acción judicial.

Paso del tiempo que tiene la virtualidad de impedir el análisis de las pretensiones o su extinción, concediéndose a quien pretenda elevar una acción, un margen de tiempo de tres años para ejercer su reclamación, empero tal como lo señala el artículo 151 del CTPSS, el curso del término extintivo es susceptible de interrupción, a través de la simple reclamación que se reciba respecto a los derechos o prestaciones debidamente determinados.

Ahora bien, respecto a la excepción de prescripción, tal como lo señala el artículo 32 del CPTSS y lo expuso la Corte Constitucional en sentencia C - 820 de 2011, la viabilidad del análisis de tal medio exceptivo dentro de la etapa inicial del trámite, se ata a la certeza de los presupuestos de configuración de la excepción, permitiendo a las partes presentar elementos de prueba que sustenten su posición, así indicó la alta corporación:

17. Existe cierto tipo de razones de defensa del demandado que no obstante responder a la naturaleza de las excepciones de mérito o de fondo, en cuanto tienen la potencialidad de atacar la pretensión, por decisión del legislador pueden proponerse también como previas, adquiriendo por virtud de esta determinación un carácter mixto. Tal es el caso de las excepciones de prescripción y cosa juzgada, las cuales de

conformidad con el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo, podrán proponerse por el demandado como previas durante la primera audiencia, y ser resueltas en la misma. Cabe precisar, que en lo que concierne a la excepción de prescripción, la ley laboral establece como condición para que pueda ser tramitada como previa el que no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión, de su interrupción, o de su suspensión.

18. La norma prevé igualmente la posibilidad de que el demandante presente pruebas respecto de las excepciones propuestas por el demandado como previas, las cuales se practicarán en la misma audiencia, en la cual, de acuerdo con la dinámica de la oralidad, se adoptará la determinación sobre las excepciones, incluidas las de cosa juzgada y prescripción, siempre y cuando, en este último evento, no existiere controversia acerca de la exigibilidad de la pretensión, o de la interrupción o suspensión.

Con estas premisas se descende al **caso concreto**, encontrándose por fuera de discusión la existencia de un contrato de prestación de servicios donde Paula Andrea Montoya Zuluaga contrata los servicios de asesoría jurídica de Carlos Mario Restrepo Patiño y Gloria Auxilio Mejía para que estos ejercieran la asesoría jurídica, iniciando y llevando hasta su término una demanda ordinaria de simulación absoluta de mayor cuantía contra Luz Inés Tobón Echeverri.

En contraprestación del servicio además de un pago inicial de \$1'500.000, cuya satisfacción no se discute, se estipuló “el 30% del valor comercial de los inmuebles recuperados”, contrato que para efectos del pago no estableció un plazo, ni condición. (pág 62/64)

Tampoco se discute que la labor encomendada de llevar a cabo un proceso judicial por simulación absoluta no fue ejecutada ya que entre Paula Andrea Montoya y los señores Luz Inés Tobón Echeverri y Sergio Cossio Tobón se suscribió un contrato de transacción, obligándose estos últimos a restituir la posesión de un inmueble ubicado en la Calle 29 N° 32-67 del Municipio de Urrao

con matrícula inmobiliaria N° 035-20549 y ceder los derechos herenciales de un inmueble rural de unas 25.000 hectáreas aprox, identificado con matrícula inmobiliaria N° 035-8036; a cambio que Paula Andrea reconociera la propiedad de Luz Inés en el inmueble ubicado en la Calle 29 N 32-79 de Urrao y se *“compromete de manera expresa a desistir de las acciones penales instauradas contra SERGIO COSSIO TOBÓN Y LUZ INÉS TOBÓN ECHEVERRI, para el efecto entregará documento dirigido a la Fiscalía donde comunica su decisión de desistir de las mencionadas acciones penales. Igualmente desiste de iniciar cualquier acción civil de simulación contra la señora LUZ INÉS TOBÓN ECHEVERRI”* (pág 73 – archivo N° 1)

Documento suscrito por los intervinientes en esta transacción, con dos coadyuvantes: Alba Luz Vargas Sepúlveda y Luz Marina Zuluaga Orozco y como testigos Antonio Higueta Quiroz y **Carlos Mario Restrepo Patiño** este último que corresponde al abogado asesor de Paula Andrea Montoya y quien ahora acciona. Documento suscrito el 25 de julio de 2015 (pág 75 – archivo N° 1) fecha que no es cuestionada por ninguno de las partes.

En razón a este acuerdo el 31 de octubre de 2015 se protocolizó la escritura pública de compraventa del inmueble de matrícula inmobiliaria N° 035-20549 (casa en el Municipio de Urrao) de Luz Inés Tobón a Paula Andrea Montoya (certificado de libertad pág 24/27 – archivo N° 4).

También existe claridad que los acá accionantes remitieron a la señora Montoya Zuluaga un escrito enunciado como “requerimiento pago honorarios profesionales” reclamando el reconocimiento de varios conceptos, el primero de ello la suma de \$67’800.000 que identifican como el resultado del “pleito seguido contra LUZ INÉS TOBÓN ECHEVERRI Y SU HIJO” con los que se obtuvo la escrituración a su nombre de la casa ubicada en el Municipio de Urrao...” (pág 88/91) documento que tiene como fecha de emisión el 10 de diciembre de 2018

data que señala la activa fue remitida a la actora y que esta acepta como respuesta al hecho 29 de la demanda.

Ahora bien, restringido a los pedimentos de la demanda, se establece que los acá accionantes acuden al proceso ordinario laboral reclamando el cumplimiento de los honorarios profesionales pactados en documento del 23 de diciembre de 2014, específicamente aquel que se otorga para efectos de llevar a cabo la demanda ordinaria de simulación absoluta, el que se reprocha como insoluto y se tasan los honorarios adeudados en la suma de \$67'800.000. Las adicionales peticiones son conexas a la satisfacción de este contrato, sin que se incluya como objeto pretensión ora de condena, ora declarativa, establecer algún tipo de novación o modulación de la obligación establecida en aquel contrato de prestación de servicios.

Despejados así los presupuestos fácticos, se establece que la labor encomendada en el contrato de prestación de servicios cuestionado se satisfizo con la transacción suscrita el 25 de julio de 2015, momento en que Paula Andrea Montoya se comprometió a desistir de cualquier acción encaminada a establecer la simulación de las enajenaciones realizadas por María Estella Tobón Echeverri, contrato de transacción del que hizo parte el abogado Carlos Mario Restrepo Patiño, quien lo suscribió como testigo, sin tener anotación alguna de la participación de la Dra. Gloria Auxilio Mejía Betancur .

Es así que el contrato de prestación de servicios que ahora se cuestiona se agotó el 25 de julio de 2015, momento en que se estableció que no se adelantaría la acción judicial de simulación, por lo que se abrió paso a los contratados a ejercer el cobro de su labor la que ya se había cumplido y conforme a los términos del contrato no estaba sujeta a ninguna condición.

Se destaca que pese a que entre las partes se establecieron una serie de obligaciones para la asesoría en diferentes actuaciones judiciales y policiales que

constan en cuatro (4) contratos de prestación de servicios jurídicos, la satisfacción de ninguno de ellos se ató al cumplimiento correlativo de los otros. En particular el pago de honorarios en el contrato para el proceso de simulación no se supeditó ora a la terminación del proceso de sucesión, ora a la elaboración de un avalúo para determinar el valor del inmueble que se obtuvo a cambio de desistir del proceso de simulación.

Ahora, las consideraciones adicionales expuestas por el señor Restrepo Patiño en la sustentación del recurso de apelación y en los alegatos de conclusión no tienen la entidad suficiente para modificar la fecha de exigibilidad de sus honorarios, es así que consideraciones como la usanza de su oficina de abogados “que no acostumbra a cobrar antes de terminar la gestión”, o elucubraciones referentes a la data de exigibilidad como la fecha en que se registró la escritura de compraventa entre Luz Inés Tobón y Paula Andrea Montoya o la fecha de elaboración del avalúo del inmueble no modifican las condiciones pactadas en el contrato que pretende cobrar.

Así las cosas, verificando que los acá accionantes esperaron hasta el 10 de diciembre de 2018 para reclamar la satisfacción de sus honorarios profesionales, su acción se encontraba prescrita, lo que hace inane el estudio propuesto, conclusión a la que arribó la falladora de instancia y que confirma esta corporación.

En los términos expuestos quedan resueltas las materias de impugnación.

Costas en primera instancia como indicó la A quo. en esta a cargo de la activa, de las que se tasan las agencias en derecho en la suma de \$100.000 en favor de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el Tribunal Superior de Medellín, Sala quinta de decisión laboral **confirma de forma total la providencia recurrida**

Costas en primera instancia como indicó la A quo, en esta a cargo de los demandantes en favor de la accionada, tasando las agencias en derecho en la suma de \$100.000.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Los Magistrados,


DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN


MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA


ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001- 31- 05-017-2020-00047
Demandantes: CARLOS MARIO RESTREPO PATIÑO Y GLORIA AUXILIO MEJÍA BETANCUR
Demandados: PAULA ANDREA MONTOYA ZULUAGA
Decisión: **CONFIRMA**
Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 15 de marzo de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO